

# Diálogo Nacional en la República Dominicana

CARLOS DORE CABRAL

*Director de Investigaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo*

En la última década del siglo pasado y en lo que va de la actual, los llamados Diálogos Nacionales se han convertido en un nuevo sujeto de las Ciencias Sociales. Es un sujeto conceptualmente en formación. La existencia de un número reducido de experiencias y, más escasas aún, de sistematización de las experiencias de ese fenómeno, así como la reciente y dispersa asunción del mismo por politólogos, sociólogos y economistas, no permite hablar de un concepto teórico o teóricamente acabado, sino más bien de un concepto operativo en proceso de construcción.

Ese mecanismo de resolución de conflictos de gobernabilidad adquiere cada vez más importancia en las áreas socioeconómica y política de las sociedades de América Latina y del Caribe. Tanto es así que en abril de 2002 se celebró lo que puede entenderse como el primer gran evento de carácter transnacional para analizar los diálogos nacionales de diversos países de la subregión latinoamericana y caribeña. Se llamó "Seminario Internacional sobre Experiencias Comparadas de Diálogos Nacionales en América Latina", organizado por la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional del gobierno de Perú y contó con la colaboración y el soporte de International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), el Banco Mundial y el ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social). Las experiencias allí analizadas fueron la dominicana, la salvadoreña, la mexicana, la costarricense y la peruana. No son sólo instituciones internacionales como IDEA, el Banco Mundial (BM) y el ILPES las que muestran interés por los diálogos nacionales, sino que también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con un departamento y especialistas en los mismos y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) del gobierno de los Estados Unidos, que financia programas de desarrollo políticos que incluyen ese elemento.

Esas prácticas de diálogos nacionales y esos empeños de los gobiernos e instituciones multilaterales por que se realicen son elementos que despiertan el interés de las disciplinas sociales en el tratamiento sistemático de ese tipo de reuniones que buscan consenso que disuadan problemas de gobernabilidad en ciernes o en proceso.

Una labor tan importante como para que el estudio por los expertos sociales del fenómeno de los diálogos nacionales se produzca, requiere que quienes los organizan, participan o simplemente los observan expliquen en forma sistemática y descriptiva sus experiencias. Ésos son los cimientos que hay que establecer para poder hacer posteriores esfuerzos de conceptualizaciones teóricas.

Ésa es la motivación de este ensayo, en que se sintetizan los principales elementos que caracterizaron la gestación, organización y realización del Diálogo Nacional de la República Dominicana, que tuvo lugar entre el 19 de noviembre de 1997 y el 8 de marzo de 1998. El propósito es hacer un balance de los factores de éxitos y de los obstáculos o condiciones perfectibles de ese proceso. Pero antes nos detendremos en los que pueden considerarse antecedentes de esa iniciativa y, más adelante, en una descripción explicativa del contexto sociopolítico en que se gestó y se realizó ese ensayo de participación social.

#### ANTECEDENTES

En la República Dominicana, desde finales de los ochenta y principios de los noventa, se venían realizando experiencias de discusiones y consultas sobre cómo debe desarrollarse el país. La mayor parte de esas experiencias fueron de carácter sectorial, con un fuerte protagonismo de la sociedad civil. Las formas de denominación de esos ensayos refuerzan nuestra afirmación anterior: Agenda empresarial, sindical, de las ONGs, de la Junta Agroempresarial, conjuntamente con reuniones deliberativas y resolutivas acerca de políticas sociales y reformas políticas y económicas, promovidas por los centros académicos nacionales.

Hubo también experiencias de los así llamados Diálogos Tripartitos efectuadas por parte de la sociedad política representadas por los tres partidos mayoritarios (Partido Revolucionario Dominicano [PRD], Partido Reformista Social Cristiano [PRSC] y Partido de La Liberación Dominicana [PLD]). En ese espacio se realizaban reuniones frecuentes de esas tres organizaciones para discutir los proyectos pendientes de aprobación en el Congreso Nacional.

Ambas líneas de concertación aumentaron su importancia de cara a las elecciones (presidenciales y congresuales) de 1994 y a las elecciones extraordinarias (presidenciales) de 1996, convocadas a raíz de la paralización institucional y política que se originó después de la acusación de fraude contra el gobernante Partido Reformista en 1994. Ese callejón sin salida se resolvió por un gran pacto entre los partidos políticos y la sociedad civil, que estuvo precedido de grandes debates. Los aspectos centrales de ese acuerdo fueron que el gobierno elegido en 1994 limitara su gestión a dos años, que se prohibiera constitucionalmente la reelección presidencial sucesiva y que se celebraran elecciones generales en dos años. Éste fue un gran debate.

Cabe señalar, finalmente, que, por vez primera, las campañas políticas servían para la discusión de los programas de los partidos políticos. Estos programas pasaron a ser el eje del enfrentamiento de ideas *per se* entre los partidos.

#### CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Los antecedentes hasta ahora señalados permitirán entender más adelante cómo la gente se incorporó tan rápida y masivamente al proceso de discusión que auspició la administración Fernández (1996-2000). Eran señales de una sed de participación de la población, que no terminaba de encontrar salida a través de los mecanismos creados para esos fines. Pero, si los hechos descritos en el apartado anterior explican la receptividad popular frente a la propuesta del diálogo nacional, no se puede afirmar que esos hechos fueran los elementos que estimularon el mismo. En sentido estricto, el factor que precipitó el Diálogo Nacional fue la realidad sociopolítica de amenazas significativas a la gobernabilidad democrática, que se fue creando y cobrando fuerzas meses antes del inicio de ese proceso de participación social, y que culminó en el paro general del 11 y 12 de noviembre de 1997, o sea, una semana antes del decreto del 19 de ese mes, donde se anunciaba al país la creación de una comisión organizadora del Diálogo Nacional.

En sentido general, se puede decir que por aquel entonces en la República Dominicana había una gran crisis de los servicios; crisis heredada por el gobierno de entonces, en términos de la carencia de energía eléctrica, carencia de suministro de agua, grandes dificultades en lo relativo a las carreteras, las calles, la higiene general de la población; a lo cual se unió la sequía que azotó el país prácticamente durante todo 1997 y que, junto a fallos en políticas agrícolas, creó una crisis alimentaria generalizada.

Esta situación generó un gran movimiento de demandas y protestas que redujo la simpatía que había llevado a la presidencia al Dr. Leonel Fernández. Esa situación contó con un marco político muy importante, que en la República Dominicana todavía es prácticamente un secreto. El gobierno de Fernández sube al poder comprometido con una reforma económica estructural con la cual parecían estar de acuerdo los diferentes sectores de la nación (empresariales, sindicales, académicos, cívicos y políticos), a juzgar por el contenido de las diferentes agendas sectoriales ya referidas. En efecto, cuando el Dr. Fernández tiene que enviar su presupuesto para 1997, lo acompaña de un paquete de medidas que contenían ese programa de reforma estructural, en el supuesto de que se hacía eco de un viejo consenso nacional. Sin embargo, ninguno de los sectores que se había comprometido previamente con ese programa de reformas se identificó con él en el momento en que el Ejecutivo trató de que se convirtiera en Leyes. Todo lo contrario. Esos sectores se opusieron a los pro-

yectos que entonces llegaban y se discutían en las cámaras legislativas, quedando así evidenciadas las diferencias entre los discursos y las prácticas pre y post electorales, entre sus simples discursos reformadores y su verdadera disposición a impulsar esas transformaciones.

Esto redujo el respaldo que importantes grupos fácticos le habían ofrecido a Fernández, pensando que una vez fuera presidente no tendría de verdad las intenciones de llevar adelante este programa de reformas, sino que éste era nada más que una declaración de corte electoral. Por eso, cuando se dieron cuenta de la seriedad del compromiso de Fernández gobernante con las palabras de Fernández candidato, comenzaron a distanciarse de su gobierno y a dejarlo sin respaldo frente a las consabidas protestas. Las demandas de esas protestas, aunque legítimas, no podían ser resueltas de inmediato.

La búsqueda de soluciones a esta situación, desde la perspectiva gubernamental, conduce a crear una serie de mecanismos institucionales de discusión con los sectores que protestaban, entendiendo que era necesario llegar a un acuerdo entre el gobierno que estaba dispuesto a resolver las demandas y la población que las proclamaba. En ese momento se hicieron algunos ensayos de construcción de consenso previos al gran Diálogo Nacional.

Éste es el caso de las Comisiones Presidenciales de Apoyo al Desarrollo Barrial y Provincial creadas en julio de 1997. La creación de este organismo proviene del origen de las protestas: llegaban fundamentalmente de los barrios, pues en la República Dominicana, como en el resto de América Latina, los grupos de la sociedad civil de carácter territorial se organizan por barrios, tanto en Santo Domingo como en Santiago (las dos principales ciudades dominicanas). En las otras provincias se organizan en el ámbito local y provincial. Y su función fue la de canalizar el debate y los acuerdos entre esos grupos y el Estado.

En el caso de las ONGs, que eran las otras instituciones a través de las cuales se canalizaban las demandas y protestas, no se creó una comisión especial porque éstas son sumamente heterogéneas y complejas. Lo que se hizo al respecto fue poner en manos de un funcionario oficial y de una oficina gubernamental la relación directa con las ONGs. El propósito de esa decisión era crear un espacio de colaboración entre éstas y el gobierno. A fin de cuentas, estas organizaciones perseguían lo mismo que las intenciones declaradas del gobierno: resolver los problemas cotidianos más apremiantes con el objetivo de luchar contra la pobreza y trabajar para fortalecer la democracia.

En este contexto sucede uno de esos fenómenos extraños de la política concreta, difícil de imaginar en el análisis abstracto de la política. La gobernabi-

lidad democrática dominicana deja de depender de que se hicieran las reformas estructurales que se consensuaron en los grandes debates de fines de los 80 y principios de los 90 y de los que se decía en aquella época que dependía el futuro de la nación, y pasa a depender de las demandas que se hacían en cada una de las poblaciones nacionales. Se da primacía a los problemas concretos, imposibles de resolver si no se llevaban a cabo las reformas, las cuales se ponían en segundo lugar e incluso se olvidaban. Es precisamente por esto, por que la gobernabilidad democrática comienza a depender de los precios de los productos de primera necesidad, de la dotación de servicio como la luz eléctrica y del arreglo de las calles y cañadas, por lo que el gobierno crea mecanismos de negociaciones en los barrios y en las provincias y con las ONGs. Pero, a pesar de ello, el ritmo de respuesta que el gobierno daba a las demandas siguió siendo percibido como muy lento por parte de la población, al tiempo mismo de que esas demandas acumuladas eran resaltadas por los partidos de la oposición.

Así, se fueron creando las condiciones para un gran paro nacional, que alentaban y organizaban operadores políticos que tenían control sobre organizaciones de la sociedad civil, ONGs, sindicatos y comités barriales; organizaciones ligadas a grupos de izquierda que se resistían a aceptar una convivencia política democrática y que planteaban un programa de carácter político al margen del sistema de partidos existentes; y grupos con vínculos con partidos opositores del sistema, como el Revolucionario Dominicano.

El paro general de noviembre de 1997 fue exitoso y ciertamente duró el período de tiempo que sus organizadores se propusieron (dos días). El gobierno concentró sus esfuerzos durante esa protesta en evitar –y lo logró– que se produjeran desórdenes y muertes innecesarias. Para conseguirlo, militarizó el país, bajo la divisa de que mostrando la fuerza se evitaba tener que usarla. Una técnica bastante arriesgada, pero que se entendió era la única manera de que no volviera a suceder lo que siempre ocurría cuando había paro general: robos e intimidación a la población, así como muertes innecesarias.

La huelga se hizo y no hubo violencia. Vistos los hechos a posteriori, fue conveniente para el oficialismo que se realizara, pues condujo a que sectores sociales que se distanciaron del gobierno por su persistencia en las reformas comenzaran de nuevo a acercársele; ya que entendieron los riesgos que implicaban para ellos una desestabilización del país, debida a acciones de esa naturaleza.

Esto modificó el mapa político favorablemente al gobierno. Se redujo una campaña en su contra, tan tenaz y audaz que llegaba hasta hablar de su sus-

titución. A partir de ese momento, sectores de poder y de clase media dejaron de formar parte de esa campaña y comenzaron a dar pasos de acercamiento al oficialismo. Sin embargo, los partidos opositores no cesaron de reclamar al gobierno que dialogara con los grupos que organizaban y dirigen las protestas.

Según esos partidos, el gobierno no atinaba a resolver los problemas, lo cual lo obligaba a dialogar con esos grupos, que habían demostrado una gran capacidad movilizadora y desorganizadora del país, que ponía en riesgo la gobernabilidad democrática. El gobierno se resistió a dialogar con ellos, si no renunciaban a su petición de huelga nacional. No lo hicieron, y el gobierno no dialogó. Sin embargo, el mismo día en que terminó el paro (12 de noviembre de 1997), el presidente planteó a sus colaboradores más cercanos que había que dialogar, pero no solamente con los grupos que participaron en el paro, sino con todo el país. Se tenía que hacer, no un diálogo coyuntural, sino un diálogo más amplio que le diera al país una agenda concertada a corto, medio y largo plazo.

Esta determinación sugería que el gobierno comprendía, después de más de un año de movilizaciones y paros, que no le bastaba para seguir gobernando democráticamente con la legitimidad del voto, sino que era preciso recurrir, además, a otro tipo de legitimidad. Y la única posible, en esas circunstancias, era discutir con toda la población, la que votó a su favor y la que votó en su contra, cuáles eran las propuestas de realizaciones que esa población entendía que había que favorecer por encima de las demás. Si no se abría ese proceso de participación popular en la gestión gubernamental, al menos en el ámbito de las deliberaciones sobre el qué hacer, las protestas continuarían y, entonces, sólo sería posible gobernar limitando la legalidad democrática. El presidente y sus colaboradores más cercanos se decidieron por el diálogo y no por un diálogo sólo con los jefes de la protesta y con los grupos que se entendían expertos en las dificultades de la nación, que eran una minoría, sino con todos los sectores nacionales organizados y no organizados.

Otra razón que justificaba este diálogo era que el de 1996-2000 fue un gobierno elegido por la mitad de la población, lo cual significaba que la otra mitad apoyaba al principal partido de oposición, el Perredista –Partido Revolución Democrática (PRD)–. Además, una parte de esa mitad que votó por el gobierno pertenecía al otro partido de oposición, el Reformista, que lo había apoyado en la segunda vuelta electoral. De manera que ese gobierno, si se le observaba sólo desde el punto de vista de su partido, tenía bases minoritarias. O sea, que si bien el PLD (Partido de Liberación Democrática) había ganado las elecciones, más de la mitad de la población, en principio, seguía partidos

que creían en otros programas de gobierno. Ese diálogo ayudó, asimismo, al consenso gubernamental en torno a la necesidad de discutir los problemas de nuevo y ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas.

#### INICIO Y DESARROLLO DEL DIÁLOGO NACIONAL

El 19 de noviembre de 1997 sale a la luz pública el decreto 489/97 que crea y conforma la Comisión Organizadora del Diálogo Nacional. La misma incluía personalidades de la vida nacional que, aunque convocadas a título individual, formaban parte de una diversidad de sectores: universidades, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sector empresarial y medios de comunicación, entre otros. El diálogo se convocó con los objetivos siguientes:

1. Organizar una amplia discusión acerca de los retos que enfrentaría la República Dominicana en el próximo siglo.
2. Discutir los distintos enfoques que haya en el país acerca de los problemas que afectan a la sociedad en el presente y de cara al siglo XXI.
3. Unificar las propuestas de soluciones presentadas públicamente en el período 1990-1997 para superar esos problemas.

Esa convocatoria comenzó a tener dificultades desde el primer día. Una parte significativa de la opinión pública coincidía en que ese diálogo no iba a avanzar, en que era un aborto, porque los diálogos no se decretan. Uno de los integrantes de la comisión organizadora renunció, alegando que le habían nombrado sin ser consultada, hecho que alimentó las críticas y dio lugar a que se ampliara la percepción de que ése era un plan del gobierno para conquistar el apoyo de la población.

A partir de ese momento, la organización y desarrollo del Diálogo Nacional se convirtió en una sucesión de batallas estratégicas por fortalecer la credibilidad y legitimidad de ese esfuerzo de concertación. Como ya de alguna manera se ha dicho, la objeción original, más general e importante que confrontaba, era —insistían sus opositores— que detrás de la aparente flexibilidad y apertura gubernamentales, que significaba la convocatoria a un diálogo con los distintos sectores nacionales a discutir las principales dificultades por las que atravesaba el país, se escondía una intención muy fuerte de imponer un evento, a través del cual el oficialismo terminaría burlándose de quienes participaran y del conjunto de la nación. Para quienes así pensaban, esa estrategia oficial se expresaba en la forma vertical en que se escogieron los temas a tratar y los organizadores de esa magna reunión.

La reacción de los delegados gubernamentales y de la sociedad civil que formaban la comisión organizadora fue convertir en agenda de sus debates esas

objeciones (y todas las demás que surgieron en ese proceso), y aceptar las críticas y sugerencias hechas, siempre que no anularan la naturaleza de un diálogo abierto y libre, sino que, por el contrario, facilitarían su realización. Fue de esa lógica o mecánica de la que surgió el que probablemente haya sido el diálogo nacional de mayor participación social del subcontinente latinoamericano y caribeño. En los subapartados que siguen se sintetiza esquemáticamente ese proceso de conquistar confianza y credibilidad para un debate que duró más de tres meses y en que participaron más de cuatro mil organizaciones o individuos independientes.

- 1. La definición de los temas para debatir en el diálogo.** Originalmente, la idea era tratar cuatro puntos: la política económica, la política social, el estado de derecho y las reformas políticas; pero al enfrentar las críticas de supuesta exclusión, asumen seis puntos adicionales con énfasis en sectores populares, comunitarios y sindicales para discutir las propuestas y demandas generadas por este sector. Los otros temas son: agropecuaria, infraestructura y energía, medio ambiente, políticas culturales y políticas internacionales.
- 2. El acercamiento y motivación a los diferentes sectores de la vida nacional** para asegurar su participación en el Diálogo Nacional y solicitarles que seleccionaran autónomamente sus representantes en cada una de las directivas de las subcomisiones temáticas. A partir de estas reuniones de acercamiento, cada uno de los sectores identificados seleccionó diez representantes para esta fase metodológica de preparación. Cada uno de ellos se integró en una subcomisión temática, asegurándose así la conformación heterogénea y democrática de todas.
- 3. La conformación de las diez directivas de las subcomisiones de trabajo,** una por cada tema, que prepararían el proceso de discusión y la metodología dentro de cada sector. La idea clave era que las diez personas integrantes de la Comisión Organizadora no dialogaran entre ellas, sino más bien que propiciaran que el país dialogara. En efecto, la constitución de las subcomisiones, siguiendo la metodología anterior, descentralizó y democratizó desde sus inicios el Diálogo Nacional.
- 4. La elaboración de un documento base** que sirviera de referente en el debate. Este documento de más de 500 páginas recoge más de tres mil propuestas generadas en el período 1990-1997. Éstas están organizadas por los temas de las subcomisiones, incluyendo el tipo de propuesta, un resumen de la misma y la(s) organización(es) o individuo(s) que la proponen. El documento denominado “Un Proyecto de Nación” recoge la mayor parte de lo planteado por las ONGs, las iglesias, las universidades, etc. Cuando el

PRD decía que no estaba participando en el diálogo, la realidad era que todas sus propuestas estaban presentes: 417 propuestas de las discutidas en el diálogo fueron elaboradas por el principal partido de la oposición. Éste fue otro elemento importante para disipar la idea de que el diálogo estaba siendo preparado por el gobierno y para los fines del gobierno.

5. **Las inscripciones o registro de participantes** en el Diálogo Nacional se llevaron a cabo durante tres días (6, 7 y 8 de febrero de 1998). Estas jornadas se convirtieron en una especie de festival del diálogo, porque se inscribieron en esos tres días más de cuatro mil organizaciones y personas, especialmente en Santo Domingo, la capital de la República. Paralelamente, tomó lugar el proceso de registro en las provincias del interior, en las gobernaciones provinciales. Sin embargo, en este nivel regional y provincial hubo serias dificultades que condujeron a una fase de trabajo más intensivo.
6. **La realización de reuniones regionales** (del 30 de enero al 5 de febrero de 1998) y la decisión de celebrar Diálogos Regionales antes de la plenaria final del Diálogo Nacional. Con esta decisión, se respondió a la demanda de que la gente del interior no sabía lo que era el Diálogo, que éste solamente era para los de la capital. Entonces se habilitaron cuatro días para que el mismo Presidente de La República viajara a cuatro puntos del país explicando los objetivos y metodología del proceso: la ciudad de Santiago (centro de la región Norte del país), Dajabón (centro de la región Fronteriza), Azua (centro de la región Sur) y La Romana (centro de la región Este).
7. **Los diálogos regionales y el trabajo de facilitación en el ámbito provincial** (1 al 4 de marzo de 1998), como espacios que posibilitaron la descentralización real del Diálogo Nacional, y la presentación y debate de propuestas y demandas que respondieran a las realidades locales. En primera instancia no se había contemplado la realización de estos Diálogos Regionales por lo que se contaba con poco tiempo para su celebración. Para ello se contrataron personas que actuaran como facilitadores o acompañantes del proceso de discusión y organización para la presentación de propuestas. De hecho, los días que en la capital de la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, se hicieron los diálogos en el ámbito de subcomisiones, simultáneamente en cada provincia del país se idearon diálogos iguales para que la gente preparara sus propuestas para llevarlas a los diálogos regionales.
8. **La celebración del gran Diálogo Nacional o Plenaria Final** (6 al 8 de marzo de 1998) en que, a lo largo de tres días de arduo trabajo, fueron seleccionadas y aprobadas las propuestas debatidas en cada una de las fases anteriores. Los integrantes de la asamblea contaban con un grado impor-

tante de legitimidad y representatividad, ya que fueron elegidos democráticamente en cada uno de los espacios anteriores de discusión.

9. Por último, la **publicidad y la socialización de informaciones** –logísticas y metodológicas– del Diálogo Nacional permanecieron como ejes transversales a lo largo de todo el proceso. Este punto fue muy importante para lograr el objetivo de mantener el diálogo en el centro de la agenda nacional mediante la publicación oportuna (fundamentalmente en la prensa escrita) de los horarios, lugares, metodología y cambios realizados. Esta estrategia fue menos efectiva con relación a la radio y la televisión, medios en los que se proyectó intensivamente el hecho de que se realizaría el diálogo pero se insistió relativamente poco sobre su significado, implicaciones y metodología.

#### BALANCE CRÍTICO DEL DIÁLOGO NACIONAL

##### *Aportes y factores favorecedores*

- Potencialización y canalización del deseo histórico de participación de la población dominicana. Tal y como plantearon muchas personas, lo más importante es que podían ser realmente escuchados y asumidos como interlocutores. Reivindicación del ciudadano como ente activo y propositivo.
- Autoselección como mecanismo democrático de participación y garante de la legitimidad de los representantes elegidos dentro de cada sector. Papel del Gobierno únicamente como mediador y facilitador en términos de logística y organización, en cuanto a la selección de los participantes.
- Desarrollo de prácticas de negociación y articulación dentro de los diferentes sectores, desembocando en la estructuración de agendas mínimas por sector. Fortalecimiento de coordinaciones intersectoriales dentro de la sociedad civil y entre ésta y el Estado.
- Flexibilidad organizativa dado el alto nivel de receptividad por parte del Presidente de la República y de la Comisión Organizadora ante la necesidad de hacer ajustes y cambios organizativos, metodológicos y de fondo.
- Oportunidad de unificar las diferentes propuestas existentes en una agenda conjunta de desarrollo.
- El Diálogo Nacional constituyó una iniciativa movilizadora que contribuyó a la renovación de lideratos, incluyendo el presidencial. Importancia y valoración de la sociedad civil vía la legitimación de sus propuestas.
- El papel del Presidente como moderador, expositor y simple participante desafía el modelo autoritario tradicional.

##### *Limitaciones por superar*

- Riesgo de quedar únicamente en el ámbito del discurso por parte de todos los actores. Se destacó que la participación no puede quedarse en la discu-

sión y formulación de propuestas, sino que abarca la ejecución, control y evaluación posterior de éstas.

- Críticas y cuestionamientos a la modalidad de surgimiento de la Comisión Organizadora (vía decreto presidencial) y el impacto negativo que, al principio, tuvo en la credibilidad del proceso.
- Diferenciación marcada en los niveles de incidencia de cada sector en función de la experiencia y capacidades acumuladas previamente al diálogo (discriminación involuntaria, no intencional).
- Como contraparte negativa de la flexibilidad, se trabajó con altos niveles de improvisación. En concreto, hubo críticas a los plazos, muy cortos, y a la precipitación en algunas modificaciones.
- Las propuestas generadas se ven afectadas por la cultura política imperante. Los observadores internacionales destacaron cómo la mayoría de las mismas no fueron planteadas como acciones ciudadanas o en conjunto sino como demandas al Gobierno.
- Falta de comprensión e involucración de algunos funcionarios, siendo muy ilustrativo el caso de la mayoría de los gobernadores provinciales.

#### **LA FASE DE SEGUIMIENTO DEL DIÁLOGO NACIONAL**

En su etapa de ejecución, el Diálogo Nacional procedió a dar seguimiento a los acuerdos generados en el proceso culminado el pasado 8 de marzo de 1998 y al inicio de los mecanismos permanentes de diálogo que podrían servirles de continuación. Ya ese mismo día las subcomisiones habían seleccionado las 10 propuestas prioritarias de cada tema. Al día siguiente de finalizar la plenaria, el Consejo de Gobierno se reunió para iniciar la aplicación de 21 propuestas de ejecución inmediata.

Adicionalmente, se proveyó a todas las instancias gubernamentales de una matriz de seguimiento en la que se solicitaba información periódica sobre las acciones surgidas de propuestas del Diálogo Nacional que les correspondían implementar según su área de trabajo. Esta ficha de formato sencillo incluía el nombre y descripción de la acción, sus antecedentes, subcomisión del diálogo a que correspondía, institución(es) responsable(s), funcionario responsable, inversión requerida, posibles impactos y área(s) geográfica(s) de incidencia. Este instrumento fue devuelto por parte de las instituciones gubernamentales incluyendo los dos principales ministerios del área social (Educación y Salud) al igual que instituciones importantes del área ambiental, económica, cultural y deportiva.

Todavía había muchos problemas que resolver, como por ejemplo la relación entre lo que el Diálogo aprobó y lo que puede hacer el Congreso Nacional (Poder Legislativo), que es un mecanismo constitucional que tiene sus funcio-

nes y por el que necesariamente pasan los proyectos que implican transformaciones institucionales importantes. Sin embargo, cabe reiterar que el diálogo se adoptó no simplemente como un proceso que termina, sino como una nueva forma de gobernar.

Por ello se instaló una Casa del Diálogo al frente de la cual se pusieron personas que no pertenecían al gobierno –integrantes de la Comisión Organizadora–; y este mismo mecanismo serviría para solventar los conflictos que se dieran en el país. El acuerdo final firmado en el año de clausura del Diálogo Nacional comprometía a los sectores participantes a seguir trabajando y uniendo esfuerzos en ese sentido.

El Diálogo Nacional no sustituyó, sino que complementó los esfuerzos pasados y presentes de democratización y descentralización del poder en la República Dominicana. Muy por el contrario, contribuyó a potenciarlos en tanto mecanismo de consulta global y permanente referido a un mayor cúmulo de experiencias y actores involucrados.

El Diálogo Nacional constituyó un importante ejercicio de aprendizaje colectivo en la construcción de la democracia participativa que deseamos. Por tanto, coincidimos con quienes destacaron que su valor no se limitó a las propuestas aprobadas en el mismo y los mecanismos que creó sino, además, su valor como práctica educativa democrática que implica cambios en la cultura política dominicana.

Después de la salida del gobierno de la administración peledesta del gobierno del Dr. Leonel Fernández, el gobierno del PRD, encabezado por el Agrónomo Hipólito Mejía, que se había opuesto desde su inicio mismo a ese proceso, disolvió los mecanismos formales a que éste había dado lugar, como la Casa del Diálogo; y desconocía los acuerdos que en el mismo se habían alcanzado.

Sin embargo, durante su período, no pudo desconocer el concepto de diálogo e incluso de Diálogo Nacional, pese a la referencia que hacía a la experiencia del gobierno anterior, y mucho menos el hecho de tener que enfrentar vía diálogo varios momentos de su gestión. Esta realidad ha dado lugar a una experiencia de diálogo nacional muy distinta a la anterior. Pero la descripción explicativa de esa nueva etapa en la búsqueda de consenso en la República Dominicana requeriría un nuevo artículo. ●